Contenido

[ANTECEDENTES 1](#_Toc187858936)

[DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1](#_Toc187858937)

[a) Solicitud de información 1](#_Toc187858938)

[b) Turno de la solicitud de información 2](#_Toc187858939)

[c) Respuesta del Sujeto Obligado 2](#_Toc187858940)

[DEL RECURSO DE REVISIÓN 3](#_Toc187858941)

[a) Interposición del Recurso de Revisión 3](#_Toc187858942)

[b) Turno del Recurso de Revisión 4](#_Toc187858943)

[c) Admisión del Recurso de Revisión 4](#_Toc187858944)

[d) Informe Justificado del Sujeto Obligado 4](#_Toc187858945)

[e) Manifestaciones de la Parte Recurrente 5](#_Toc187858946)

[f) Requerimiento de información adicional 5](#_Toc187858947)

[g) Cierre de instrucción 5](#_Toc187858948)

[CONSIDERANDOS 6](#_Toc187858949)

[PRIMERO. Procedibilidad 6](#_Toc187858950)

[a) Competencia del Instituto 6](#_Toc187858951)

[b) Legitimidad de la parte recurrente 6](#_Toc187858952)

[c) Plazo para interponer el recurso 7](#_Toc187858953)

[d) Causal de Procedencia 7](#_Toc187858954)

[e) Requisitos formales para la interposición del recurso 7](#_Toc187858955)

[SEGUNDO. Estudio de Fondo 8](#_Toc187858956)

[a) Mandato de transparencia y responsabilidad del Sujeto Obligado 8](#_Toc187858957)

[b) Controversia a resolver 10](#_Toc187858958)

[c) Estudio de la controversia 11](#_Toc187858959)

[d) Conclusión 35](#_Toc187858960)

[RESUELVE 36](#_Toc187858961)

Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de **quince de enero de dos mil veinticinco.**

**VISTO** el expediente formado con motivo del Recurso de Revisión **07222/INFOEM/IP/RR/2024** interpuesto por **XXXXXXX**, a quien en lo subsecuente se le denominará **LA PARTE RECURRENTE**, en contra de la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de Toluca**, en adelante **EL SUJETO OBLIGADO**, se emite la presente Resolución con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

# ANTECEDENTES

## DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### a) Solicitud de información

El **veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro,** **LA PARTE RECURRENTE** presentó una solicitud de acceso a la información pública ante el **SUJETO OBLIGADO**, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vinculada al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX). Dicha solicitud quedó registrada con el número de folio **02691/TOLUCA/IP/2024** y en ella se requirió la siguiente información:

“requiero los expedientes señalados en el saimex 1217/2024”

**Cualquier Otro Detalle Que Facilite La Búsqueda De La Información:**

“son 2 expedientes de la contraloria a la Unidad de Transparencia”

**Modalidad de entrega**: a *través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del* ***SAIMEX****.*

### b) Turno de la solicitud de información

En cumplimiento al artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro**, el Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** turnó la solicitud de información a los servidores públicos habilitados que estimó pertinente.

### c) Respuesta del Sujeto Obligado

El **catorce de noviembre de dos mil veinticuatro,** la Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** notificó la siguiente respuesta a través del SAIMEX:

En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:

En atención a la solicitud con folio 02691/TOLUCA/IP/2024, me permito adjuntar al presente la respuesta correspondiente. Sin más por el momento, reciba un saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Norma Sofía Pérez Martínez

Asimismo, **EL SUJETO OBLIGADO** adjuntó a su respuesta los archivos electrónicos que se describen a continuación:

* ***Respuesta 2691.pdf:*** Archivo constante de 2 páginas, en las que se contiene el oficio de fecha 19 de julio de 2024, dirigido al solicitante, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia, en el que le indicó:

“…hago de su conocimiento que la Contraloría Municipal y Servidor Público Habilitado, informó que, con fundamento a la Octingentésima Octogésima Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Transparencia, se aprobó la clasificación de información como reservada de hasta por 6 meses, en referencia a los expedientes recaídos en las denuncias referidas en la contestación inicial de la Solicitud de Información con número de folio 1217/TOLUCA/IP/2024.”

* ***ACTA DE LA OCTINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024.pdf:*** Archivo constante de 8 páginas, en las que se contiene el Acta de la Octingentésima Octogésima Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Transparencia del Municipio de Toluca, del día 4 de noviembre del 2024, en la que se contiene el Acuerdo AT/CT/01/2024 en el que se clasifica como información reservada por un periodo de seis meses, la información referente a los expedientes de la Contraloría a la Unidad de Transparencia**,** para dar respuesta a la Solicitud de Información número 02691/TOLUCA/IP/2024.

## DEL RECURSO DE REVISIÓN

### a) Interposición del Recurso de Revisión

El **quince de noviembre de dos mil veinticuatro,** **LA PARTE RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, mismo que fue registrado en el **SAIMEX** con el número de expediente **07222/INFOEM/IP/RR/2024**, y en el cual manifiesta lo siguiente:

**ACTO IMPUGNADO**

la inoble respuesta

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

clasifican información que ya causo estado, de acuerdo a la ley, ya corrio el termino, ya es publica

### b) Turno del Recurso de Revisión

Con fundamento en el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **quince de noviembre de dos mil veinticuatro,** se turnó el recurso de revisión a través del SAIMEX a la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez**, a efecto de decretar su admisión o desechamiento.

### c) Admisión del Recurso de Revisión

El **diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro,** se acordó la admisión a trámite del Recurso de Revisión y se integró el expediente respectivo, mismo que se puso a disposición de las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### d) Informe Justificado del Sujeto Obligado

El **veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro EL SUJETO OBLIGADO** rindió su informe justificado a través del SAIMEX, que contienen lo siguiente:

* ***7222.pdf:*** Archivo constante de 13 páginas, suscritas por la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la Comisionada Ponente, en donde rinde el informe justificado correspondiente, ratificando la respuesta primigenia.

Esta información fue puesta a la vista de **LA PARTE RECURRENTE** el **tres de diciembre de dos mil veinticuatro** para que, en un plazo de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo establecido en el artículo 185, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### e) Manifestaciones de la Parte Recurrente

**LA PARTE RECURRENTE** no realizó manifestación alguna dentro del término legalmente concedido para tal efecto, ni presentó pruebas o alegatos.

### f) Requerimiento de información adicional

El **diez de diciembre de dos mil veinticuatro,** la ponencia resolutora notificó por medio del SAIMEX al **SUJETO OBLIGADO** un requerimiento de información adicional, a fin de contar con mayores elementos, para la resolución del medio de impugnación.

Requerimiento que fue atendido, por **EL SUJETO OBLIGADO** en fecha **trece de enero de dos mil veinticinco,** a través de **correo electrónico institucional.**

### g) Cierre de instrucción

Al no existir diligencias pendientes por desahogar, el **catorce de enero de dos mil veinticinco,** la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez** acordó el cierre de instrucción y la remisión del expediente a efecto de ser resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Dicho acuerdo fue notificado a las partes el mismo día a través del SAIMEX.

# CONSIDERANDOS

## PRIMERO. Procedibilidad

### a) Competencia del Instituto

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; ordinal 2, fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

### b) Legitimidad de la parte recurrente

El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, ya que se presentó por la misma persona que formuló la solicitud de acceso a la Información Pública,debido a que los datos de acceso **SAIMEX** son personales e irrepetibles.

### c) Plazo para interponer el recurso

**EL SUJETO OBLIGADO** notificó la respuesta a la solicitud de acceso a la Información Pública el **catorce de noviembre de dos mil veinticuatro** y el recurso que nos ocupa se tuvo por presentado el **quince de noviembre de dos mil veinticuatro**; por lo tanto, éste se encuentra dentro del margen temporal previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### d) Causal de Procedencia

Resulta procedente la interposición del recurso de revisión, ya que se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 179, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

### e) Requisitos formales para la interposición del recurso

Es importante mencionar que, de la revisión del expediente electrónico del **SAIMEX**, se observa que **LA PARTE RECURRENTE** no proporcionó su nombre para ser identificado, lo que en estricto sentido provoca que no se colmen los requisitos establecidos en el artículo 180 de la Ley de Transparencia; sin embargo, el artículo 15 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que toda persona tendrá acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, de lo que se infiere que **el nombre no es un requisito indispensable** para que las y los ciudadanos ejerzan el derecho de acceso a la información pública.

Asimismo, la Ley de la materia prevé en su artículo 155, párrafo segundo la posibilidad de que las solicitudes de información sean anónimas, al utilizar un nombre incompleto o, inclusive un seudónimo. En adición a lo anterior, el propio artículo 180, en su último párrafo, establece que cuando el recurso de revisión se interponga de manera electrónica no será indispensable que contenga algunos requisitos, entre ellos, el nombre de **LA PARTE RECURRENTE**; por lo que, en el presente caso, al haber sido presentado el recurso de revisión vía **SAIMEX**, dicho requisito resulta innecesario.

## SEGUNDO. Estudio de Fondo

### a) Mandato de transparencia y responsabilidad del Sujeto Obligado

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6.***

*(…)*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****.* ***Para el ejercicio del derecho de acceso a la información****, la Federación y* ***las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

***“Artículo 5****.-*

*(…)*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho****.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

***Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes****:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

Asimismo, el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios indica que la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez, gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares.*

Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios refiere que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Esto es, que los Sujetos Obligados deben atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les sean realizadas, y proporcionar la información pública que obre en su poder, conforme al estado en que se encuentre, sin que sea necesario procesar la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma, teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular o practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretarán a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentra, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

En esa tesitura, el artículo 24 último párrafo de la Ley de la Materia dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial.

### b) Controversia a resolver

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada, resulta conveniente precisar que, una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que **LA PARTE RECURRENTE** solicitó lo siguiente:

a) Los dos expedientes referidos en la solicitud de información con número de folio 01217/TOLUCA/IP/2024.

En respuesta, conforme a las constancias que obran en el expediente electrónico se advierte que **EL SUJETO OBLIGADO** se pronunció a través del Titular de la Contraloría Municipal, quién informó que con base a la Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Toluca, del día 04 de noviembre del presente año, se aprobó la propuesta para la clasificación de información como reservada de hasta por 6 meses, en referencia a los expedientes recaídos en las denuncias referidas en la contestación inicial de la Solicitud de Información con número de folio 1217/TOLUCA/IP/2024; derivada de que la información solicitada se encuentra en un proceso de investigación.

Ahora bien, en la interposición del presente recurso **LA PARTE RECURRENTE** se inconformó de la clasificación de la información requerida, manifestando que la misma ya causó estado de acuerdo a la Ley y como ya feneció el termino, esta es pública.

Abierta la etapa de instrucción, **EL SUJETO OBLIGADO** rindió su Informe Justificado, en el que el Servidor Público Habilitado, en términos generales ratificó la respuesta proporcionada.

Bajo las premisas anteriores, se concluye que la controversia a dilucidar en el presente medio de impugnación será **verificar si la clasificación de información realizada por el SUJETO OBLIGADO es adecuada y apegada a derecho.**

### c) Estudio de la controversia

Se tiene que en el caso en particular **EL SUJETO OBLIGADO** opuso una medida de restricción de acceso a dicha información, por ello es necesario traer a contexto lo dispuesto por el Artículo 6, apartado A, numeral I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece:

“**Artículo 6**

…

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

En el mismo tenor, se trae a colación lo estipulado en el artículo 5, párrafo trigésimo segundo, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que dispone:

“**Artículo 5.-...**

...

Este derecho se regirá por los siguientes principios y bases siguientes:

**I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos**, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información;

...”

De lo anterior, se deduce que la Constitución Local le otorga a todos los documentos en posesión de las autoridades la calidad de públicos y únicamente pueden ser reservados temporalmente por razones de interés público y en los términos expresamente señalados en la Ley de la materia, es decir, el derecho de acceso a la información pública no es absoluto pero su restricción debe estar sujeta a un sistema rígido de excepciones, en el que los **SUJETOS OBLIGADOS** deben fundar y motivar las causas de interés público que se ponen en riesgo al liberarse la información.

Asimismo, el reservar la información implica el reconocimiento por parte del **SUJETO OBLIGADO** de que se encuentra dentro de sus archivos; empero, advierte que existen causas presentes que impiden la publicidad y/o entrega de la información durante cierto periodo de tiempo.

Siendo pertinente aclarar que, la información que se clasifica bajo la premisa de reservada no pierde el carácter de pública, sino que se impide su acceso temporalmente de la ciudadanía, es decir que, por un tiempo determinado, se conservará y custodiará la información de manera especial, y una vez transcurrido el plazo de custodia, el documento podrá divulgarse.

Por todo lo anterior, la reserva de la información implica una medida de protección a la información, la cual debe entenderse como el proceso mediante el cual **EL SUJETO OBLIGADO** determina que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos conforme a las normas aplicables.

En tal virtud, conforme al artículo 49, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los Comités de Transparencia, tienen la atribución de aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información, mientras que, el artículo 128 de la misma Ley, indica que, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia, deberá confirmar, modificar o revocar la decisión, que para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán de señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al **SUJETO OBLIGADO** a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; siendo que, además, **EL SUJETO OBLIGADO** debe, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Dicho lo anterior, es necesario definir a la prueba de daño como la responsabilidad de los Sujetos Obligados de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de la información lesiona el interés debidamente protegido por la Ley, y que el menoscabo o daño que puede producirse con la publicidad de la información, es mayor que el interés de conocerla, por lo que debe clasificarse como reservada.

De este modo, conforme al artículo 132 en correlación con el numeral 49, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para clasificar la información se debe de atender a lo dispuesto por la normativa y aplicar, de manera estricta, las excepciones del derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia, debiendo clasificar la información en el momento en que:

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información.

2. Se determine mediante resolución de autoridad competente.

3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.

Situación que se robustece con lo previsto en el artículo 141 de citada Ley, que señala que las causales de reserva previstas se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño.

Igualmente, la clasificación de la información debe estar sustentada en el Acuerdo de Clasificación correspondiente, en el que, de manera fundada y motivada, se establezcan las hipótesis normativas aplicables al caso concreto y se analice la prueba de daño que prevé el artículo 129 de la Ley de Transparencia de mérito, para lo cual, los Sujetos Obligados deberán considerar que:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;
* El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y
* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

De tal manera, las limitaciones y/o restricciones al acceso a la información deben sustentarse en una adecuada clasificación que debe distinguir y tomar en cuenta qué información puede generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente protegidos.

Por lo que, podemos advertir que la restricción al acceso a la información formulada y notificada a **LA PARTE** **RECURRENTE** por **EL SUJETO OBLIGADO**, cobra vital relevancia puesto que sí ésta no arroja resultados contundentes sobre un posible peligro, deberá de concederse al particular el acceso a la consulta de misma y entregarse la información requerida.

Asimismo, es necesario hacer hincapié que los **SUJETOS OBLIGADOS** conforme a lo establecido en la Ley, no pueden emitir acuerdos de carácter general en el que clasifiquen documentos o información como reservada, ya que dicha clasificación, debe estar acorde con la actualización de los supuestos definidos; resaltándose además que, la clasificación de la información se debe realizar conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la enunciada prueba de daño.

De este modo, es necesario que **EL SUJETO OBLIGADO** al aplicar la prueba de daño, distinga entre los supuestos por los cuales puede invocar la reserva de la información y cuáles de manera clara y específica son los que le atañen a la información que se solicite; situación que le hará permisible distinguir diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando así, una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de la aplicación de dicha prueba, con el propósito de obtener, una versión pública o acuerdo conforme a lo solicitado.

Aunado a lo anterior, es importante señalar el contenido del numeral Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas para realizar la clasificación de la información se debe fundar y motivar señalando el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley o tratado internacional suscrito por el Estado Mexicano que expresamente le otorgue el carácter de reservada, así como especificando las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Siendo así que, en el caso específico de la reserva, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva; en otras palabras, para clasificar la información como reservada, se debe contar con el acuerdo respectivo el cual debe estar debidamente fundado y motivado.

Por tanto, la fundamentación y motivación consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar.

Al respecto, el máximo tribunal del país ha establecido jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

“**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION**. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”(Sic)

Así, en un acto de autoridad se surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente, por qué, a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se siente afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Atento a lo anterior, es necesario hacer hincapié que para clasificar la información como reservada, se deben precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, asimismo es claro que los mismos deben aplicar de manera restrictiva y limitada las hipótesis de clasificación y no hacerlas valer de manera general.

Asimismo, se precisa, que conforme a lo establecido en el artículo 59, fracción V, de la Ley de Transparencia, es una atribución de los Servidores Públicos Habilitados integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de la información, la cual debe de contener los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta, como se advierte enseguida:

**Artículo 59.** Los servidores públicos habilitados tendrán las funciones siguientes:

…

V. Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta;

Así, una vez, que el Titular de la Unidad de Transparencia, tiene en su poder la petición formulada por el Servidor Público Habilitado, éste a su vez, lo someterá a la consideración de los integrantes del Comité de Transparencia para su confirmación, modificación o revocación, como lo disponen los artículos 53, fracción X, 49, fracciones II y VIII del ordenamiento invocado, que son del tenor siguiente:

“**Artículo 53.** Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones:

…

**X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;**

…

**Artículo 49.** Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:

…

II. **Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia** de ampliación del plazo de respuesta, **clasificación de la información** y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;

…

VIII. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;

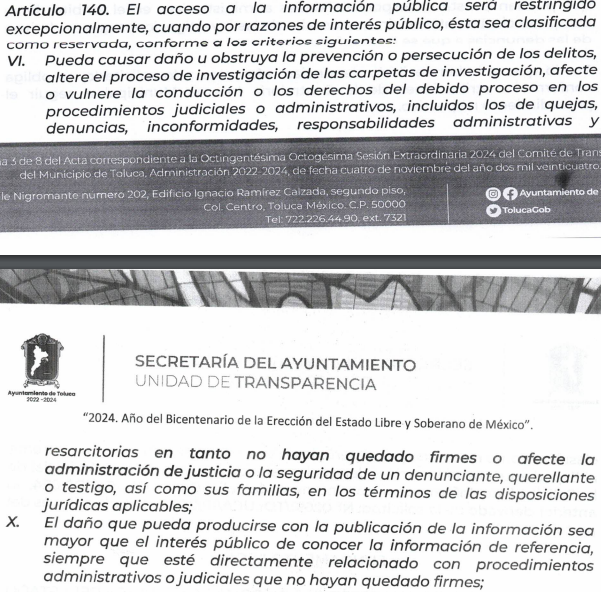
…” Sic.

En ese contexto, resulta necesario analizar dicho Acuerdo de Confirmación de Clasificación como Reserva de la información antes referida, entregado por **EL SUJETO OBLIGADO** en su respuesta, a fin de establecer si el Comité de Transparencia cumplió cabalmente con las formalidades exigidas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en los términos siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cumplió:** | **Contenido** |
| **Número de folio de la solicitud** | **Sí** |  |
| **Referencia de la información solicitada** | **Parcialmente** |  |
| **Causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada** | **No** |  |
| **Fundamento y Motivación Legal** | **Parcialmente** |  |
| **Conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la Reserva de la información** | **No** |  |
| **Prueba de Daño** | | |
| **Riesgo Real, Demostrable e Identificable**  **(Modo, Tiempo y Lugar)** | **Parcialmente** |  |
| **Temporalidad de la Reserva de la información** | **Sí** |  |
| **Autoridades competentes.** | **Sí** |  |

Derivado de lo anterior, se advierte que **EL SUJETO OBLIGADO,** en el Acuerdo en el que sustenta la clasificación de la información invoca diversos artículos en su fundamentación, es decir, por un lado invoca del artículo 140, las fracciones V, VI, VIII y X, pero al momento del desarrollo de la fundamentación de las mismas, cita las fracciones VI y X, y posteriormente cita las fracciones VI y VIII Y X, como se aprecia enseguida:







Existiendo, por lo tanto, divergencia en relación con las fracciones invocadas, las cuales, se refieren a supuestos diferentes, como se advierte de su contenido, que se cita para pronta referencia.

**Artículo 140.** El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:

…

**V. Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a**:

1. Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o

2. La recaudación de las contribuciones.

**VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;**

…

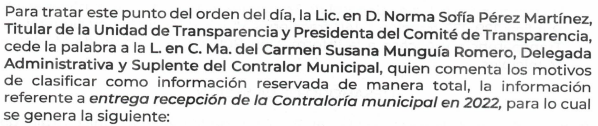
**VIII. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;**

…

**X. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;**

Por lo que se considera que no existe congruencia, ni genera certeza en cuanto a la fundamentación de la reserva invocada, ni cual es supuesto jurídico en el que se encuentra la información peticionada y que fue clasificada por **EL SUJETO OBLIGADO**.

Del mismo modo en el Acta de reserva remitida en respuesta se observa que se hace referencia a información que en ningún momento fue solicitada, tal como lo es la entrega recepción de la Contraloría Municipal 2022, como se advierte de la siguiente captura de pantalla:



Por otro lado, la prueba de daño desarrollada en el Acta en análisis, **EL SUJETO OBLIGADO** no demuestra de manera fundada y motivada que la entrega de la información peticionada por la persona solicitante genera un daño real, demostrable e identificable, omitiendo demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Asimismo, del análisis realizado al acuerdo de clasificación realizado por **EL SUJETO OBLIGADO**, se puede advertir que el mismo carece de la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, y vincularla con el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada dentro de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada, así como la prueba de daño en específico en que sustente de manera fundada y motivada, el perjuicio que le causaría el dar a conocer el avance de la investigación de referencia.

Del mismo modo, se advierte que carece de la debida fundamentación y motivación, en razón de que de la lectura y de su contenido se advierte que no contiene fundamentación con base en los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como la prueba de daño realizada, no se vincula con el numeral aplicable de los lineamientos invocados, tal y como lo estipula en su caso, el numeral Trigésimo Tercero de los citados Lineamientos en materia de clasificación.

En consecuencia, se determina, que la prueba de daño desarrollada y contenida en el Acta de clasificación de la clasificación bajo reserva, no reúne los elementos necesarios para su validez, por lo que en el presente caso no es factible dar por válido dicha reserva; sin embargo no es óbice a lo anterior, que se deje de considerar que la materia de la solicitud es en referencia a dos expedientes, en los que **EL SUJETO OBLIGADO** a través del Servidor Público Habilitado competente, en este caso, el titular del órgano Interno de Control, manifestó que se encuentran en proceso de investigación.

Para ello, resulta necesario traer a colación lo señalado por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que establece lo siguiente:

**“Artículo 94**. Durante el desarrollo del procedimiento de investigación las autoridades competentes serán responsables de:

I. Observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.

II. Realizar con oportunidad, exhaustividad y eficiencia la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.

III. Incorporar a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales.

IV. Cooperar con las autoridades nacionales como internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales y combatir de manera efectiva la corrupción.

**Artículo 95**. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas podrá iniciar:

I. De oficio.

II. Por denuncia.

III. Derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o en su caso, de auditores externos.

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras deberán garantizar, proteger y mantener el carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

**Artículo 98.** Las autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia.

Lo anterior sin *menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace referencia* en el Capítulo anterior.

**Artículo 99.** Las autoridades investigadoras deberán tener acceso a toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere la presente Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes.

Las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se deberán celebrar convenios de colaboración con las autoridades correspondientes.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 39 de la presente Ley.

Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, incluyendo acciones encubiertas y usuario simulado con apego a la legalidad, la presente Ley y demás normatividad que para este fin sea expedida por los titulares de los entes públicos responsables.

**Artículo 104. Las autoridades investigadoras una vez concluidas las diligencias de investigación, procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale como falta administrativa y en su caso, determinar su calificación como grave o no grave.**

Una vez determinada la calificación de la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y éste se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.

En el supuesto de no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y acreditar la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente debidamente fundado y motivado.

Lo anterior sin perjuicio de poder reabrir la investigación en el supuesto de presentarse nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.

**Artículo 105.** Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras podrán abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la presente Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, en el supuesto que derivado de las investigaciones practicadas o de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, se advierta que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

…

**Artículo 106**. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las autoridades investigadoras, será notificada al denunciante, cuando éste fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al expediente de presunta responsabilidad administrativa.

La calificación y la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere el artículo 105, podrán ser impugnadas, en su caso, por el denunciante, a través del recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso de inconformidad tendrá como efecto la suspensión del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto dicho recurso sea resuelto.

**Artículo 116.** El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el informe de presunta responsabilidad administrativa.

**Artículo 119**. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y en su caso, la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, la Secretaría de la Contraloría, los órganos internos de control, el Órgano Superior de Fiscalización, así como las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o municipal, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.

**Artículo 129**. Para conocer la verdad de los hechos las autoridades resolutoras podrán valerse de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin más limitación que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente y con respeto a los derechos humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones.

Las autoridades resolutoras gozarán de la más amplia libertad para hacer el análisis, darle el valor correspondiente a cada una de las pruebas, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, deberán justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicarán y justificarán su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios directos, indirectos e indiciarios que aparezcan en el procedimiento.

**Artículo 180**. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será integrado y emitido por las autoridades investigadoras y deberá contener los siguientes elementos:

I. El nombre de la autoridad investigadora.

II. El domicilio de la autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones.

III. El nombre o nombres de los servidores públicos que podrán imponerse de los autos que se dicten en el expediente de responsabilidad administrativa por parte de la autoridad investigadora, precisando el alcance de la autorización otorgada.

IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como el ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que desempeñe.

En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados.

**V**. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa.

**VI.** La infracción que se le imputa al señalado como presunto responsable, precisando las razones por las que se considera que ha cometido la falta.

**VII.** Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa para acreditar la comisión de la falta administrativa y la responsabilidad atribuida al presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado por la autoridad competente, que la solicitó con la debida oportunidad.

**VIII.** La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso.

**IX**. Firma autógrafa de la autoridad investigadora.

**Artículo 184.** El desarrollo de las audiencias del procedimiento de responsabilidad administrativa, se llevarán a cabo de conformidad con las siguientes reglas:

**I.** Serán públicas.

**II.** No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna, ya sea por los que intervienen en ella o por aquellos ajenos a la misma.…

**Artículo 188.** Las resoluciones serán:

**I.** Acuerdos, cuando se trate de resoluciones de trámite.

**II.** Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten provisionalmente.

**III.** Autos preparatorios, a las resoluciones por las que se prepara el conocimiento y decisión de un asunto, se ordena la admisión, la preparación y desahogo de pruebas.

**IV.** Sentencias interlocutorias, aquellas que resuelven sobre un incidente o una cuestión intraprocesal o accesoria al procedimiento.

**V.** Sentencias definitivas, las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa.**(Énfasis añadido)**

Conforme a lo anterior, se considera que existen tres etapas en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa para determinar la falta en la que haya incurrido algún servidor público, a saber las siguientes:

1. **Investigación:** la cual consiste en lo siguiente:

* **Inicia:**

De oficio

**Por denuncia**

Derivado de auditorías

* Una vez determinada la calificación de la conducta, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.

1. **Sustanciación:** En este periodo se puede realizar lo siguiente:

* Se califican los hechos como faltas administrativas graves o no graves
* La autoridad substanciadora podrá admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa.
* Las partes, pueden presentar las pruebas o alegatos que consideren pertinentes,

1. **Resolución:**

* Se emite resolución y se notifica a las partes.

Teniendo que, en el presente asunto, conforme a lo expresado por **EL SUJETO OBLIGADO** se encuentra en la etapa de investigación, por lo que aún no se concluye, sino que se está en la substanciación.

Del mismo modo, es de traer a contexto que, de conformidad con la Ley de Transparencia Local, uno de los supuestos de clasificación que se prevé como información reservada, a **aquella que vulnere la conducción de los procedimientos de responsabilidades administrativas en trámite, en tanto no hayan causado estado.** Por lo cual, para considerar que se actualiza dicha causal es necesario que se configuren los siguientes elementos:

1. **La existencia de un procedimiento administrativo, que se encuentre en trámite, y**;
2. **Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento**.

Así, se desprende que el expediente clasificado por **EL SUJETO OBLIGADO**, cuenta con las características de un procedimiento de responsabilidades administrativas, por lo que, se procede a analizar cada uno de los requisitos señalados en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, con la finalidad de verificar si se configura la hipótesis de reserva en estudio:

1. **La existencia de un procedimiento administrativo, que se encuentre en trámite.**

En ese contexto, cabe precisar que **EL SUJETO OBLIGADO**, refirió la existencia de un procedimiento administrativo, que se encuentre en trámite, en específico en la etapa de investigación, toda vez que, al existir un procedimiento en curso, se puede vulnerar el curso de la investigación que en su caso se esté llevando a cabo.

Así, se acredita el primero de los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales para acreditar la reserva en cuestión, pues el expediente, aún no cuentan con alguna Resolución.

1. **Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.**

Al respecto, en el presente caso, se trata de investigación para determinar si se inicia o no como tal el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, en la cual la autoridad investigadora califica si los hechos son constitutivos de alguna falta administrativa grave o no grave y elabora un Informe de Presunta Responsabilidad y envía a la autoridad substanciadora, quien determina la procedencia legal.

Al respecto, este Instituto advierte lo siguiente:

* + Que existe **un riesgo real, demostrable e identificable**, toda vez que el expediente, apenas se encuentran en etapa de investigación, lo que requiere que los servidores públicos de la Contraloría, accedan a la documentación necesaria para determinar si existe o no una posible responsabilidad.
  + En efecto, hasta este momento, se encuentran analizando las documentales del caso, para verificar si existe o no una responsabilidad.
  + De hacerse del conocimiento público, hacia dónde se enfoca la investigación, los servidores públicos probables responsables podrían entorpecer la investigación, proporcionar documentación falsa o incompleta, así como alterar o destruir documentos o, perder pruebas esenciales que permitan demostrar el tipo de falta realizada por la servidora pública o la inexistencia de esta.
  + Que el riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general; pues con dicha documentación, se daría a conocer el sentido de las investigaciones, así como de la información que está siendo analizada por **EL SUJETO OBLIGADO**, en la investigación correspondiente.

Por otro lado, es menester resaltar que la información requerida y conforme a la información proporcionada a este Instituto en el requerimiento de información adicional la información peticionada por **LA PARTE RECURRENTE** no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por otro lado, no pasa desapercibido de este Órgano Garante que la inconformidad presentada a través del medio de impugnación que nos ocupa, señala que el término de la clasificación de la reserva ya ha fenecido, por lo tanto resulta oportuno invocar el expediente conformado por la promoción de la solicitud de información número **01578/TOLUCA/IP/2024** que da motivo al recurso de revisión **04767/INFOEM/IP/RR/2024**, en donde se solicita la misma información que en la solicitud referida en los antecedentes del presente fallo, para lo cual **EL SUJETO OBLIGADO** clasificó la información como reservada, por lo tanto de una revisión sobre las constancias que obran en dicho expediente se tiene que la clasificación primigenia tuvo a lugar en fecha **diez de julio de dos mil veinticuatro** y la solicitud de información materia de la presente resolución fue promovida en fecha **veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro** y el recurso de revisión citado al rubro en fecha **quince de noviembre de dos mil veinticuatro** por lo tanto el acuerdo de clasificación de información reservada, a la fecha de la solicitud y promoción del recurso de revisión se encontraba vigente.

No obstante a lo anterior, este Órgano Garante puede visualizar que **EL SUJETO OBLIGADO** fue omiso en confirmar la clasificación de la información solicitada como reservada a través del acta remitida en respuesta siendo esta la Octingentésima Octogésima Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Transparencia del Municipio de Toluca, del día 4 de noviembre del 2024, en donde nuevamente se clasifica como reservada la información referente a los expedientes instaurados sin emitir pronunciamiento especifico alguno sobre el hecho en que la documentación ya se encontraba clasificada de manera previa.

Por lo anterior, se considera que **EL SUJETO OBLIGADO** debe entregar el acuerdo respectivo en donde se manera fundada y motivada se confirme la clasificación de información como reservada, misma que de manera previa ya había sido aprobada por el Comité de Transparencia.

Finalmente, cabe resaltar que conforme a las atribuciones conferidas a este Órgano Garante no está facultado para manifestarse sobre la veracidad de lo afirmado por parte del **SUJETO OBLIGADO** pues no existe precepto legal alguno en la Ley de la materia que lo faculte para ello.

### d) Conclusión

En consecuencia, y conforme a lo anterior, se deslumbra que resulta improcedente la reserva invocada por el ente recurrido, en atención a qué el acuerdo remitido no reúne los requisitos necesarios para su validez en términos de la normatividad invocada, empero los expedientes referidos se encuentran en proceso de investigación, este Órgano Garante determina ordenar el acuerdo debidamente fundado y motivado que emita el Comité de Transparencia en el que confirme y clasifique como información reservada los expedientes referidos en la solicitud de mérito, en términos de los ordinales 49, fracción VIII, 129, 140 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y Municipios.

Por lo anteriormente expuesto, este Instituto estima que las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **LA PARTE RECURRENTE** devienen **fundadas** y suficientes para **MODIFICAR** la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**.

Así, con fundamento en lo establecido en los artículos 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y en los artículos 2, fracción II, 9, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 186 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

# RESUELVE

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el **SUJETO OBLIGADO** en la solicitud de información **01578/TOLUCA/IP/2024**, por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **LA PARTE RECURRENTE** en el Recurso de Revisión **07222/INFOEM/IP/RR/2024**,en términos del considerando **SEGUNDO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **SUJETO OBLIGADO**, a efecto de que entregue a través del **SAIMEX**, lo siguiente:

*El acuerdo debidamente fundado y motivado que emita el Comité de Transparencia en el que se confirme la clasificación como información reservada los expedientes referidos en la solicitud de acceso a la información de mérito, que se encuentren en trámite, en términos de los artículos 49, fracción VIII, 129, 140 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y Municipios.*

**TERCERO.** Notifíquese vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX**) la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de **diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de **tres días hábiles** siguientes, sobre el cumplimiento dado a la presente. Asimismo, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** Notifíquese a **LA PARTE RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX**).

**QUINTO**. Hágase del conocimiento a **LA PARTE RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnar la presente resolución vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables o recurso de inconformidad de acuerdo con lo establecido en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**SEXTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **SUJETO OBLIGADO** podrá solicitar una ampliación de plazo de manera fundada y motivada, para el cumplimiento de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

SCMM/AGZ/DEMF/CDFE